

«Fallamos: Que, declarando no haber lugar a su inadmisibilidad, y desestimando el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don Manuel García Bernal, contra la confirmación presunta, por silencio administrativo, por el Ministerio de la Presidencia del Gobierno, de las instrucciones del Secretario de Estado para la Administración Pública de once de octubre de mil novecientos setenta y siete, sobre incompatibilidades de los funcionarios de la AISS, debemos declarar y declaramos conforme a derecho el acto impugnado; sin imposición de costas.»

Lo que comunico a VV. EE. y VV. II.

Dios guarde a VV. EE. y VV. II.

Madrid, 21 de abril de 1982.—El Subsecretario, Eduardo Gorrochategui Alonso.

Excmos. e Ilmos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Director general de la Función Pública, respectivamente, Vicepresidentes primero y segundo de la Comisión Interministerial de Transferencias de la AISS.

## MINISTERIO DE JUSTICIA

**14327** REAL DECRETO 1206/1982, de 30 de abril, por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de Conde de Alpuente a favor de don José María Allendesalazar y Travesedo.

De conformidad con lo prevenido en la Ley de cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho y Real Decreto de veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta, de acuerdo con la Diputación Permanente de la Grandeza de España y oída la Comisión Permanente del Consejo de Estado,

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de Conde de Alpuente a favor de don José María Allendesalazar y Travesedo, para sí, sus hijos y sucesores, previo pago del impuesto especial y demás requisitos complementarios.

Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,  
PIO CABANILLAS GALLAS

**14328** REAL DECRETO 1207/1982, de 30 de abril, por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de Conde de Coria a favor de don José Luis Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga.

De conformidad con lo prevenido en la Ley de cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho y Real Decreto de veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta, de acuerdo con la Diputación Permanente de la Grandeza de España y la Comisión Permanente del Consejo de Estado,

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de Conde de Coria a favor de don José Luis Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga, para sí, sus hijos y sucesores, previo pago del impuesto especial y demás requisitos complementarios.

Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,  
PIO CABANILLAS GALLAS

**14329** ORDEN de 28 de abril de 1982 por la que se actualizan las pensiones de jubilación y viudedad de los empleados de Notarías.

Ilmo. Sr.: Los incrementos del coste de la vida producidos durante el año 1981, justifican la revisión de la Orden ministerial de 30 de marzo de dicho año y la consiguiente actualización de las pensiones que ha de satisfacer la Mutualidad de Empleados de Notarías, todo ello dentro de los límites de sus posibilidades financieras.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y por iniciativa de la Junta del Patronato de la Mutualidad de Empleados de Notarías ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Las pensiones de jubilación que se vienen satisfaciendo se incrementarán en los porcentajes siguientes:

- Pensiones de cuantía entre cero y 400.000 pesetas, 15 por 100.
- Pensiones de cuantía entre 401.000 y 800.000 pesetas, 8 por 100.
- Pensiones de cuantía desde 801.000 en adelante, 6 por 100.

Art. 2.º Asimismo, las actuales pensiones de viudedad serán incrementadas en la siguiente proporción:

- Pensiones de cuantía entre cero y 400.000 pesetas, 15 por 100.
- Pensiones de cuantía entre 401.000 y 600.000 pesetas, 8 por 100.
- Pensiones de cuantía desde 601.000 en adelante, 6 por 100.

Art. 3.º Los incrementos establecidos en los dos artículos precedentes sólo afectarán a las pensiones de jubilación y viudedad causadas con anterioridad al 1 de enero de 1982.

Art. 4.º Cualquiera que sea la fecha en que se causaron las pensiones de jubilación y viudedad, se fijan para éstas los siguientes topes mínimos:

- a) Pensiones de jubilación, 398.160 pesetas brutas anuales.
- b) Pensiones de viudedad, 298.620 pesetas brutas anuales, equivalentes a un 75 por 100 de las pensiones mínimas de jubilación.

Art. 5.º Lo dispuesto en esta Orden ministerial se aplicará con efectos a partir de 1 de enero del corriente año.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.  
Dios guarde a V. I. mucho. años.  
Madrid, 26 de abril de 1982.

CABANILLAS GALLAS

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

## MINISTERIO DE DEFENSA

**14330** ORDEN 111/00788/1982, de 6 de abril, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 21 de enero de 1982 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Vallespín Ros, alumno de la Academia de Infantería.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Jesús Vallespín Ros, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra las resoluciones de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 16 de enero de 1980 y 21 de mayo de 1980, se ha dictado sentencia con fecha 21 de enero de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Vallespín Ros, contra las resoluciones de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de dieciséis de enero y veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta, declaramos nulas estas resoluciones y, en consecuencia, disponemos que dicha Sala de Gobierno debe señalar al actor nuevos haberes pasivos conforme a los factores de empleo de Coronel, grado, catorce trienios y aplicando a la base reguladora el porcentaje del noventa; y ordenamos a la Administración al abono de las costas causadas.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e inserta en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con la establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el punto 3.º del artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 6 de abril de 1982.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

**14331** ORDEN 111/00787/1982, de 6 de abril, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 21 de enero de 1982 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Chacón Millán, Brigada de Infantería.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don José Chacón Millán

quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdo de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar, se ha dictado sentencia con fecha 21 de enero de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimamos el recurso promovido por don José Chacón Millán, contra el acuerdo de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar que desestimó el recurso de reposición contra el que le señalaba el haber pasivo, que anulamos por contrario a derecho y en su lugar declaramos el que tiene a que el haber pasivo sea fijado en el noventa por ciento de la base reguladora; todo ello con imposición de costas a la Administración.»

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el punto 3.º del artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 6 de abril de 1982.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

**14332** *ORDEN 111/00788/1982, de 6 de abril, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 21 de enero de 1982 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Rafael Sánchez de los Santos, Sargento de Ingenieros, retirado.*

Excmo Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Rafael Sánchez de los Santos, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra los acuerdos de 30 de enero y 3 de diciembre de 1980, se ha dictado sentencia con fecha 21 de enero de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando el recurso interpuesto por don Rafael Sánchez de los Santos, Sargento de Ingenieros, retirado, contra los acuerdos de treinta de enero y tres de diciembre de mil novecientos ochenta, de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar, debemos anular y anulamos tales actos como contrarios a derecho en el único extremo en que han sido impugnados y en su lugar, declaramos el derecho del actor a que se le señale nueva pensión con arreglo al noventa por ciento del sueldo regulador que le fue reconocido en dichos acuerdos, con los consiguientes efectos económicos; se imponen a la Administración las costas causadas.»

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el punto 3.º del artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 6 de abril de 1982.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

**14333** *ORDEN 111/00789/1982, de 6 de abril, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 18 de diciembre de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Blanco Vega, Sargento de Artillería, retirado.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Manuel Blanco Vega, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra los acuerdos del Consejo Supremo de Justicia Militar de 19 de septiembre y 3 de diciembre de 1980,

se ha dictado sentencia con fecha 18 de diciembre de 1981, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Blanco Vega, en su propio nombre, contra los acuerdos del Consejo Supremo de Justicia Militar, de diecinueve de septiembre y tres de diciembre de mil novecientos ochenta, por lo que respectivamente, se determinó el haber pasivo del recurrente y se confirmó en reposición el anterior, debemos declarar y declaramos no conformes a derecho y anulamos dichos acuerdos en cuanto al porcentaje del sueldo regulador, que ha de ser el noventa en vez del treinta, efectuándose nuevo señalamiento con sujeción a esto; con expresa imposición de costas a la Administración.»

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la Colección Legislativa, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el punto 3.º del artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 6 de abril de 1982.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

**14334** *ORDEN 111/00790/1982, de 6 de abril, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 1 de febrero de 1982 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Pantoja Muñoz, Tercer Maquinista de la Armada.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Jesús Pantoja Muñoz, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra los acuerdos de Consejo Supremo de Justicia Militar de 5 de noviembre de 1980 y 11 de noviembre de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 1 de febrero de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando el recurso promovido por don Jesús Pantoja Muñoz, contra los acuerdos del Consejo Supremo de Justicia Militar de cinco de noviembre de mil novecientos ochenta y once de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, por los que se señalaba al recurrente el sesenta por ciento del sueldo regulador como haber pasivo, debemos anular y anulamos los mismos y en su lugar, declaramos que el recurrente tiene derecho a que le sea fijado el haber pasivo en el noventa por ciento de la base reguladora total y, en su consecuencia, condenamos a la Administración a estar y pasar por esta declaración; con expresa imposición de costas a la misma.»

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el punto 3.º del artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 6 de abril de 1982.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

**14335** *ORDEN 111/00792/1982, de 7 de abril, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 23 de diciembre de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Manzano Porgueres, ex-Sargento de Ingenieros.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Juan Manzano Porgueres, quien postula por sí mismo y de otra, como demandada, la Administración Pública, presentada y defendida por el Abogado del Estado contra los acuerdos del Consejo Supremo de Justicia Militar, de 18 de agosto de 1979, y 26 de